



**JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	11001333501020220020500
Medio de control	ACCIÓN POPULAR
Demandante	LUIS CLEMENTE PONCE MARENCO
Demandados	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- ALCALDÍA MAYOR- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PROMOTORA EQUILATERO S.A.S FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., VOCERA DEL FIDEICOMISO SALITRE LIVING CONSTRUCTORA BOLÍVAR BOGOTÁ S.A. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
Asunto	AUTO RECHAZO

Ingresa con memorial de subsanación de demanda para decidir lo que corresponda sobre la admisión:

**1.- ACTUACIÓN PROCESAL**

Mediante providencia calendada 20 de junio de 2022<sup>1</sup>, se procedió a inadmitir la demandante de acción popular presentada por la parte actora al encontrar que la misma no cumplía con el requisito exigido en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 en armonía con el numeral 4° del artículo 161 de la misma norma, concerniente al requisito previo a la presentación de la acción popular, respecto de las siguientes entidades demandadas:

- Promotora Equilátero S.A.S
- Fiduciaria Davivienda S.A., vocera del fideicomiso salitre living
- Constructora Bolívar Bogotá s.a.
- Caja de compensación familiar Compensar.

En consecuencia, se le concedieron 3 días al actor para que subsanara la demanda, allegando el requerimiento previo ante las entidades en comento.

El actor popular, el 21 de junio de los presentes vía correo electrónico<sup>2</sup> procedió a radicar memorial manifestando que subsanaba la demanda constitucional en los siguientes términos:

*“por medio del presente memorial me permito aportar las constancias de radicación del requisito contemplado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo radicados ante las entidades CONSTRUCTORA BOGOTÁ BOLIVAR S.A.,*

<sup>1</sup> Numeral 012 expediente electrónico

<sup>2</sup> Numeral 014 expediente electrónico

*FIDUCIARIA DAVIVIENDA vocera del Fideicomiso llamado SALITRE LIVING, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR y CONSTRUCTORA PROMOTORA EQUILATERO S.A.S., las cuales se les formalizó con fecha de hoy, 21 de junio de 2022.”*

Igualmente allegó en 25 folios las peticiones agotando el requisito de procedibilidad en las entidades accionadas con fecha 21 de junio de 2022 tal y como lo manifestó en el escrito de subsanación, concluyendo que da por cumplido lo exigido en el auto que inadmitió la demanda.

## **2.- LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA COMO PRESUPUESTO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR**

Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA<sup>3</sup> se introdujeron una serie de cambios, modificaciones e innovaciones al régimen jurídico del contencioso administrativo, entre los que se encuentra la incorporación al ordenamiento jurídico de un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción popular.

Precisamente, el artículo 144 del CPACA establece:

*“[...] **Protección de los derechos e intereses colectivos.** Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.*

*Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.*

***Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda [...].*** (Negrita fuera de texto)

Como se puede apreciar, a partir de la entrada en vigencia del CPACA<sup>4</sup>, el actor popular debe dar cumplimiento al agotamiento del requisito previo de procedibilidad antes reseñado, conforme al cual se le deberá solicitar a la autoridad administrativa o particular que ejerce funciones administrativas, que adopte las medidas necesarias para proteger el derecho o interés colectivo amenazado o violado, so pena de resultar improcedente el ejercicio de la acción.

---

<sup>3</sup> Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

<sup>4</sup> Fecha 2 de julio de 2012.

Para el efecto, la entidad o el particular cuentan con los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, para adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o violación del derecho o interés colectivo.

De lo anterior, se infiere que al imponérsele esta obligación al administrado, el legislador pretendió que la reclamación ante la Administración fuese el primer escenario en el que se solicite la protección de los derechos colectivos presuntamente violados, en aras a que, de ser posible, cese de manera inmediata la vulneración a tales derechos, de suerte que al juez constitucional se acuda, solamente, cuando la autoridad administrativa a quien se le imputa la vulneración, no conteste o se niegue a ello<sup>5</sup>.

Ahora bien, la reclamación previa podrá omitirse en caso de que exista un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, siempre que haya sido expresado y sustentado en la demanda y, desde luego, acompañado del acervo probatorio idóneo y suficiente para acreditar esa especialísima situación.

En concordancia con lo anterior, el artículo 161 del CPACA, preceptúa:

***“Requisitos Previos para Demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:***

***[...]***

***4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.***

***[...]”.***

Sobre el alcance de la existencia de inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, el Consejo de Estado se pronunció en proveído de 28 de agosto de 2014<sup>6</sup>, en el siguiente sentido:

***“[...] Siendo ello así, le corresponde a la Sala determinar el alcance de la expresión “cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos”, contenida en el inciso tercero del artículo 144 del CPCA, en aras de verificar si la situación planteada por el actor, da lugar a eximirlo del requerimiento a las entidades demandadas impuesto por la disposición en comento.***

***La Corte Constitucional ha precisado de manera reiterada el alcance del concepto de perjuicio irremediable, el cual fue definido, entre otras, en la Sentencia T-293 de 2011, de la siguiente manera:***

***“[...] Ahora bien, con relación a la configuración de un perjuicio irremediable, esta Corte ha entendido por tal, aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización, porque no se puede remediar ni ser recuperado en su integridad [43]. Así mismo, se ha dicho en variada jurisprudencia, que para poder determinar si existe o no un perjuicio irremediable en un caso concreto, se deben tener en cuenta ciertos elementos, como son:***

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto del 5 de septiembre de 2013, Radicación No. 25000-23-41-000-2013-00358-01 (AP), Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

<sup>6</sup> Expediente 2014-00972-01. Consejera ponente María Elizabeth García González.

*A). El perjuicio ha de ser **inminente**: que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia; B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser **urgentes**, es decir, se debe precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; C) se requiere que éste sea **grave**, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; y D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea **impostergable**, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna[44].” (Negrillas fuera del texto)*

*La Sala considera que tal concepto y presupuestos resultan aplicables a las acciones populares, toda vez que lo pretendido por el Legislador al establecer esta excepción a la regla de requerimiento a la autoridad administrativa, es que ante la gravedad e inminencia de un hecho que pueda ocasionar un perjuicio irreparable a los derechos colectivos, se pueda acudir directamente ante la autoridad judicial, para que ésta adopte las medidas necesarias para que cese la vulneración o amenaza de los mismos [...]”.*

Precisado lo anterior, se tiene entonces, que el actor allegó una petición dirigida y radicada el 21 de junio de 2022 en la CONSTRUCTORA BOGOTÁ BOLIVAR S.A., FIDUCIARIA DAVIVIENDA vocera del Fideicomiso llamado SALITRE LIVING, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR y la CONSTRUCTORA PROMOTORA EQUILATERO S.A.S., sin tener en cuenta que dichas entidades cuentan con un término de 15 días para atender el requerimiento como lo establece el ya mencionado artículo 144 del CPACA.

Al respecto, es del caso precisar que el mencionado artículo 144 del CPACA prevé como excepción a la obligación de requerir a la administración, la existencia de un inminente peligro de que ocurra un perjuicio irremediable, sin embargo, tanto en el escrito de demanda ni en el escrito de subsanación no se detecta hecho que tal talante que pueda omitir por parte del actor el requisito de procedibilidad para admitirse sin este la demanda.

Por las anteriores razones, se procederá a rechazar la demanda toda vez que como ya se indicó el actor popular no agotó el requisito de procedibilidad tal como se desprende del artículo 20 de la Ley 472 de 1998.

**Ahora bien, el Despacho le resalta al actor que si transcurridos los 15 días desde la radiación de las solicitudes en las entidades accionadas sin que se le haya dado respuestas satisfactorias a las mismas, puede volver a acudir a la Acción Popular en aras de que se le protejan los derechos que manifiesta se le están transgrediendo a la comunidad del sector del Barrio J.J. Vargas.**

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

#### **DISPONE**

**PRIMERO.- RECHAZAR** la Acción Popular instaurada por **LUIS CLEMENTE PONCE MARENCO** en contra del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ – ALCALDÍA MAYOR – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROMOTORA EQUILÁTERO S.A.S.,**

**FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., VOCERA DEL FIDEICOMISO SALITRE LIVING, CONSTRUCTORA BOLÍVAR BOGOTÁ S.A., y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**, por no haber sido subsanada la deficiencia advertida en el auto inadmisorio, conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**SEGUNDO. - ORDENAR** el archivo del expediente, previas anotaciones de rigor.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**AUGUSTO LLANOS RUIZ  
JUEZ**

A.G.

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz

**Juez Circuito  
Juzgado Administrativo  
010  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4fcd64955bed17b3b738c679e8434c229dcf717a7b38ab3cf52de514f7f27ecc**

Documento generado en 23/06/2022 10:38:14 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>